

DIMENSIONES ECONÓMICAS DE LA PAZ

Carlos PONZIO ELIZONDO

SUMARIO: I. *El ayer de las sociedades en conflicto.* II. *Una historia para recordar.* III. *La guerra y la paz, una cuestión económica de todos los tiempos.* IV. *El sistema monetario internacional.* V. *México, un caso de la política de ajustes impuesta por el FMI.* VI. *Conclusiones.*

I. EL AYER DE LAS SOCIEDADES EN CONFLICTO

Las cuestiones de la paz hacen suponer siempre un equilibrio entre los factores reales que conforman la vida de las sociedades. Las tensiones experimentadas por la humanidad acusan profundamente un doble aspecto desde la aparición de los Estados nacionales: en un principio proyectan las luchas intestinas de los pueblos en la búsqueda de un orden que mejor les acomode y luego estas mismas disputas llevan a los pueblos que se autoestiman superiores hacia la expoliación y la conquista de otros territorios ocupados por pueblos que ya debilitados por sus diferencias internas adoptan una actitud de sumisión.

Los conflictos que ahora padece la humanidad plantean a los gobiernos la cuestión de precisar el modo y la intensidad en que habrán de conjugarse las iniciativas necesarias de cada individuo, para el progreso, con el grado de unidad social indispensable para la supervivencia de la población.

En todos los animales sociales incluyendo al hombre, la actitud de cooperación y la unidad del grupo se fundan en cierta manera en el instinto; no es preciso discutir en este lugar los primeros impulsos de la naturaleza que hicieron posible la cooperación social; pero es inobjetable que los más próximos antepasados del hombre no obraban conforme a normas reflexivas y deliberadas. Por el contrario, el comportamiento de aquellos hombres estaba inducido por un mecanismo instintivo de doble fase: la tendencia afectiva que lo une hacia los suyos o el espíritu de solidaridad que ofrece dentro de su propia tribu. Por oposición a estos reflejos emotivos que condicionan la cooperación del grupo, como una continuidad de ellos aparece la hostilidad pro-

yectada hacia los demás cuando transgreden las fronteras de su acción gentilicia .

La familia fue, desde un principio y continúa siendo hasta nuestros tiempos, la organización social más instintivamente compulsiva. El tamaño de los primeros grupos gentilicios veíase seriamente limitado por el matrimonio y el instinto de preservar la vida en pequeñas tribus con un acusado sentimiento encontrado de afectividad en la vida interna y hostilidad hacia lo extraño; aunque la transición de la familia a la pequeña tribu dilata en hacer su aparición, impulsada en los mismos aspectos biológicos de la convivencia, probablemente su paso de una organización a otra esté relacionado con el hecho de que la caza, actividad preponderante con la que el hombre satisfacía sus necesidades de alimentación y vestido, resultaba más eficaz si se practicaba en forma cooperativa. Pero la expansión de las familias no sólo aumentó las posibilidades de mejorar las condiciones de la vida, también expuso la necesidad de demandar mayores espacios y la posibilidad de entrar en contacto con los vecinos, derivada de los planes de expansión o invasión de territorios. Y justamente es en las fronteras de los territorios ocupados por aquellas familias, en donde se producen las primeras dificultades sociales que desencadenan sangrientos conflictos de exterminio, lo cual contribuyó a acendrar más el sentido de cohesión social que permitiría definitivamente la transición de la familia a la tribu, en la que ya la veneración al jefe de la tribu aparece íntimamente unida al anhelo de sobrevivir del hombre.

En general, el punto de referencia de la unidad social empieza con la amistad y la lealtad que el hombre le profesa a los miembros de su grupo; después es reforzada por el miedo a los enemigos, sobre todo durante las guerras de exterminio y luego cuando éstas se transforman en guerras de conquista, en las que los vencidos en vez de ser exterminados eran sometidos a la esclavitud y obligados a trabajar para sus conquistadores. Como es natural, en esta nueva situación la lealtad instintiva no aparece como factor de cohesión social; aquí se desdobra una actitud pasiva del hombre, derivada del miedo y del terror que le inspiraban las proezas de la guerra.

Con el tiempo las condiciones de vida han venido transformándose gradualmente, pero el mismo mecanismo psicológico que constituyó la base sobre la que se edificaran las familias primitivas y las pequeñas tribus, persiste siendo el factor de unidad de las extensas aglomeraciones que hoy conocemos como naciones; quizá bajo diversas modalidades, pero en términos generales ese reflejo psicológico ha venido a expresar un tipo de lealtad basado en la libertad de credo o sim-

plemente discurre determinado por la afinidad del territorio, las costumbres, el origen de las gentes, la cultura y los intereses que se significan como un compromiso del hombre dentro de las modernas organizaciones políticas.

II. UNA HISTORIA PARA RECORDAR

El hombre nació en la sociedad; evidentemente no es un ente que haya adquirido el hábito de lo social y lo político; menos aún se puede concebir el advenimiento de la estructura de la sociedad a través de un deliberado pacto social. Los mecanismos originales que impulsaron al hombre a la unión social yacen en la psicología individual, en una relación derivada de la actitud instintiva por sobrevivir y de una percepción casi inconsciente de sus necesidades biológicas, que obraron sobre él sin necesidad de disponer de algún instrumento coactivo que pudiera equipararse a la acción del gobierno.

Las relaciones entre los hombres bajo aquellas comunidades gentilicias se regían por la tradición, habían costumbres tribales transmitidas de generación en generación, que se respetaban y eran obedecidas por todos los miembros de la comunidad, sin que para ello se requiriera de la fuerza gubernamental; había una tendencia natural a cumplir con las costumbres gentilicias y muy excepcionalmente se atentaba contra las tradiciones. En estos remotos casos, la desobediencia era moderada por los impulsos de la sociedad y castigada con la expulsión del grupo. Pero indiscutiblemente el desarrollo de la organización social aparece como consecuencia de las guerras.

Generalmente cuando un grupo aumentaba su población hasta el extremo en que le resultaban insuficientes las tierras para el desenvolvimiento de sus gentes, en los límites fronterizos surgieron los primeros conflictos con las tribus vecinas, explicables en términos de aquel primitivo sentimiento de afinidad y cooperación social que lo unía con los propios y de hostilidad para los extraños; aquellas luchas encarnizadas originalmente, constituyeron guerras de exterminio y poco a poco al considerar los efectos de la devastación y las ventajas de disponer de un territorio mayor para los miembros de la comunidad, también se ponderó que en vez de liquidar la vida de los enemigos podíase someterlos a la esclavitud y obligarlos a trabajar en beneficio de los conquistadores. Cuando esto sucedió, fue necesario contar con una organización de gobierno, con autoridades capaces de imponer obediencia y establecer una cooperación obligatoria en gran escala; edificada la anterior estructura sobre la base de que dentro de la comu-

nidad surgieron dos clases de personas: los ciudadanos autóctonos de la comunidad, que permanecían en libertad y a quienes se les hacía depositarios del espíritu de su cultura, y los sometidos, condenados a trabajar y procrear en condiciones de esclavitud, movidos por el terror.

Hasta ese momento el desenvolvimiento de las sociedades se erigieron apoyadas en la base psicológica del individuo; pero a partir de que la esclavitud se integrara a la cultura de los pueblos, desencadenando reacciones emotivas condicionadas y la simpatía o compartimiento de las pautas de conducta habitual que generara el trabajo de los esclavos, la estructura de la sociedad no sólo hubo de examinar a la organización desde el punto de vista del primitivo sentimiento de cooperación, sino que además hubo de ponderar la estabilidad social lograda gracias al dominio que los gobiernos ejercieron sobre la vida de los miembros de la comunidad.

La historia reconoce que la civilización comienza con el establecimiento de imperios bien definidos en los que es ostentosa la dominación y la explotación de numerosas capas de la sociedad por unos cuantos hombres, de los cuales Egipto, Babilonia, Nínive y Persia son los más connotados. En estos imperios una escasa casta superior disponía de una vasta amalgama de atributos que le permitía toda clase de iniciativa personal, mientras que el numeroso sector de la población esclava, adquirida por conquistas en el extranjero, permaneció reducida a la pasividad. Y a pesar de que las antiguas instituciones de la esclavitud agujonearon con severa crueldad la conducta de los esclavos, aquellos imperios se distinguieron por su estabilidad política (la extensa durabilidad que tuvo la existencia del imperio egipcio vino condicionada por el hecho de que el poder de la monarquía encontró su justificación en el origen divino del rey y la inclinación o reverencia de la clase sacerdotal). Posteriormente todos estos imperios sucumbieron porque ninguno mantuvo la suficiente fortaleza de su unidad e identificación internas y no pudieron resistir los embates de la agresión extranjera.

Los persas finalmente caen en manos de Grecia; y aunque los griegos admitieron a los esclavos en el seno de su sociedad con alguna consideración y benevolencia, Grecia desarrolló un nuevo tipo de civilización basado en el comercio y el poderío naval que hizo que su estructura política se levantase exclusivamente en torno de sus comarcas: en la ciudad-Estado. Lo más sobresaliente de toda esta época, que incluso convierte a Grecia en lo clásico de la antigüedad, radica en que la conducción de sus ciudades siempre estuvo impregnada de la dispendiosa libertad con la que procedían los ciudadanos griegos frente

al Estado y del más estricto respeto a la iniciativa personal que exaltaba aun más las aptitudes del hombre en la plaza pública; esto explica por qué los griegos constantemente fueron susceptibles de caer bajo la sujeción de gobiernos dictatoriales; pero cuando advertían que los abusos de la tiranía atropellaban y pasaban por encima de la iniciativa del hombre, con frecuencia se pronunciaban por equilibrar la acción de los tiranos mediante el poder de las rebeliones dirigidas contra el régimen, alentadas por la distensión, con pasión y odio, desde la asamblea del pueblo; semejante idiosincrasia que sirviera de coyuntura en la vida de los griegos y extendida hasta la exaltación del individualismo, jamás fue apta para sentar las bases de una sociedad perdurable; sus frecuentes discrepancias llevadas al debate apasionado, otras veces ofuscado y demagógico, mantuvieron hundida a Grecia en la más desastrosa división, lo cual propició finalmente que su cultura cayera frente a los planes de expansión, primero de Macedonia y luego bajo el dominio de Roma.

Por vez primera en la historia, una república democrática se vio dueña de un impresionante y seductor imperio territorial. Embriagada Roma por las posibilidades que ante ella se abrían se lanzó a una política imperialista. Durante el curso de las guerras y obligados por la necesidad, los principios del poder, localizados en el derecho público, afrontaron difíciles problemas de justificación, que superó la ciencia guardando silencio sobre las modificaciones que experimentó el ejercicio del gobierno. Después de otras anexiones, la democracia abandonó la dirección de los asuntos públicos al Senado.

Desde ese momento, Roma se vio gobernada de hecho por una oligarquía; sin que la Constitución republicana sufriera enmiendas, el Senado le administró de instituciones imperiales y puso en pie ejércitos permanentes en los cuales figuraban contingentes proporcionados por los pueblos aliados o sometidos, al lado de las legiones compuestas por los ciudadanos de Roma. El ejército ya no era la nación en armas, ni era expresión de la democracia guerrera; además, su mantenimiento exigía de importantes recursos económicos. Roma había buscado éstos, al principio, en la imposición de tarifas aduaneras al comercio internacional y en el monopolio de la sal; pero muy pronto se dieron cuenta que la guerra lejos de constituir un gasto, había llegado a ser fuente de enormes beneficios. Con las indemnizaciones de guerra impuestas a los Estados vencidos, Roma se había abastecido de una considerable fuente de ingresos, Roma no sólo disponía ya de cuantiosos recursos, sino que el gigantesco botín traído de las guerras orientales por los generales, había puesto en manos de la oligarquía

romana bienes inmuebles que no encontraban acomodo en la misma sociedad romana. Con el saqueo de los pueblos conquistados, Roma se convertía en el centro de máxima acumulación de capitales de la época y, para valorizarlos, la oligarquía romana, con sus mecanismos de poder, iba a extenderse a todo el Oriente; debía encontrar un campo mayor explotable en el arrendamiento del cobro de impuestos provinciales, los abastecimientos al ejército y la flota y de las grandes obras públicas.

La aristocracia que ascendió al poder apoyada en la fuerza de los contingentes armados y que viviera a la sombra de la guerra por los esclavos, el botín y las materias primas que ella le proporcionaba, había de lanzar a Roma contra el mundo civilizado. El bando de las gentes acaudaladas expuso ante el Senado el plan para una política imperial basada en la conquista y la expoliación. La guerra iba a convertirse para Roma, bajo la omnipotencia de unos centenares de familias, en una empresa financiera. Desde entonces, los viajes de exploración cubrieron veladamente la explotación y la ruina descarada que pretenden los países grandes sobre las naciones pequeñas. Mientras Roma permaneció gobernada por las instituciones del imperio, la explotación ignominiosa y la ambición que satisfacían de las provincias subyugadas, lo mismo los gobernantes que la casta que habituaba obtener sus negocios merodeando la dirección del Estado, nunca tuvieron límites, pues haciendo florecer sobre las economías de estos pueblos las inmensas riquezas que extraían del arriendo de consumos e impuestos, las sociedades republicanas llegaron rápidamente a monopolizar la banca en todas las provincias subordinadas al imperio; y sin excepción alguna, todas las naciones expuestas a la miseria por las constantes requisas no tuvieron otra salida que sufragar sus cargas fiscales, que tomar dinero prestado de los mismos banqueros del imperio y rendirse a merced de las dádivas obtenidas con elevados intereses.

Sin embargo, lo más humillante de aquel sistema de vida no deriva tanto del hecho de que los continentes prisioneros de la guerra eran vendidos en subasta por generales codiciosos y sin escrúpulos, sino de la situación en que quedaron las provincias conquistadas, porque al paso del ejército le siguió una multitud de recaudadores de impuestos que degradaron a los gobiernos vencidos, mediante la implantación de políticas cadentes que los hicieron susceptibles de conmoción debido a las hostilidades internas, a las intrigas y los crímenes dinásticos que propiciara la inconformidad social y la miseria. Casi todos los pueblos confederados al imperio, abrumados por los problemas económicos acudían a Roma en demanda de un amparo ruinoso, que los obligaba a

suscribir empréstitos con los mismos banqueros romanos. Al imperio nada más le bastaba indicar a las provincias la conveniencia de evacuar los territorios o de realizar los cambios estructurales que favorecieran a la sujeción, para que inmediatamente se cumpliera tal intimidación. Forzados a doblegarse ante la voluntad imperial y sometidos al enorme tributo que sobre ellos recayó, los pueblos subordinados inevitablemente se precipitaron hacia la perdición. La agobiante fiscalización que el impuesto de guerra exigía contribuyó a apresurar la disgregación política y social de aquellos pueblos; los gobiernos locales dejaron de existir porque las querellas los despojaron de toda autoridad, incapacitándolos para resistir las reivindicaciones populares que dislocaron finalmente el esplendor del imperio. Esta es una historia para recordar lo que ahora puede suceder.

III. LA GUERRA Y LA PAZ, UNA CUESTIÓN ECONÓMICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Cierto que el hombre de nuestro tiempo se encuentra bastante alejado de aquellas instituciones que sólo evocan la muerte y el exterminio del hombre, la desolación, las hostilidades armadas entre los pueblos y la degradación de la especie humana; es evidente que el hombre ha progresado en conocimientos, el manejo de las técnicas modernas le ha permitido adquirir mayor destreza, incluso la organización social en la que vive inmerso ha evolucionado considerablemente elevándolo a mejores niveles. Pero contrario a lo que se ha venido enseñando, la capacidad intelectual congénita del individuo se ha conservado virtualmente estacionada, de modo que la actual estructura de la sociedad se fundamente todavía en la misma base instintiva que unió a la familia y la tribu del paleolítico.

El desenvolvimiento de la sociedad fue tras el camino que abriera la tendencia ingénita del hombre hacia la cooperación social, nacida de su instinto para sobrevivir encima de las acechanzas de la naturaleza, conducta que con posterioridad sería bautizada como la administración de las cuentas y los negocios de la casa. Cuando el hombre se hizo propietario de una maza que lo auxilió en el trabajo, su carácter se transformó: se hizo caprichoso, comodino, déspota y le cambió el concepto del mundo que lo situaba como amo y señor; idéntico fenómeno ocurrió una vez que existió la organización del gobierno, pues algunos hombres adquirieron poder sobre el resto de la comunidad y el entusiasmo por el poder indujo a los gobernantes a emprender proyectos de conquista, que resultaron mucho más atractivos

cuando los vencidos en lugar de ser exterminados eran convertidos en esclavos.

En el caso de Roma, los esfuerzos militares que realizó para mantener la unidad del imperio y consecuentemente su predominio sobre el mundo civilizado, fracasaron debido fundamentalmente a que el imperio ni siquiera pudo suministrar cierta felicidad instintiva a las clases acomodadas. Durante esa época, Roma había sido gobernada por la nobleza apoyada en el poder del ejército, y mientras mantuvo viva semejante coalición de fuerzas la aristocracia, que invirtió sus riquezas en la propiedad territorial, se opuso con energía a la distribución de tierras reclamadas por la plebe campesina. La preeminencia social y política que adquirió la aristocracia terrateniente a través del Senado, la logró tener no obstante su sistemática negativa a hacer algunos sacrificios para reconstruir una sociedad estable llena de oportunidades, merced a su inclinación por ganarse en los comicios la simpatía del pueblo, estableciendo la práctica de brindar protección a determinados grupos numerosos a cambio de limosnas y de corrupción electoral. Pero en cuanto el mismo Senado emprendió reformas encaminadas a limitar los negocios ilícitos de los militares, a fuerza de saquear y someter a las provincias, conquistas que ganaron el odio a la población romanizada, los financieros en compañía de los militares con los que compartían los triunfos de la guerra, estuvieron dispuestos a sacrificar en beneficio del pueblo los grandes latifundios de la nobleza y los recursos del mismo Estado, con tal de conservar la libertad de explotar las provincias en su provecho.

Al paso del tiempo, las exacciones financieras que realizara el imperio recogió como secuela una ola de odio e inconformidad, amalgamado en una misma ideología llena de reivindicaciones populares y patriotismo de las naciones sometidas al imperio, que en adelante dirigirían sus esfuerzos contra el protectorado establecido por Roma.

La suma de todas estas hostilidades civiles que acompañaran la vida de los romanos durante siglos, hicieron que el hombre perdiera su vigor y prevaleciera en su conciencia un espectro de pesimismo; concibieron que las comodidades que les proporcionaba el establecimiento del imperio, poco o nada tenía que ofrecerles en un ambiente impregnado de contradicciones internas que sembraron destrucción y muerte; situación que capitalizó el cristianismo preparando el advenimiento de una nueva sociedad fundada en la fe y la esperanza, divulgada por la teocracia hebrea en medio de la democracia practicada por los teutones.

A la caída del imperio romano, el florecimiento del comercio inter-

nacional se deprimió, los grandes caminos cayeron en desuso, el Estado perdió su carácter universal a lo largo del Mediterráneo y las provincias se fraccionaron en múltiples reinados que vivieron en un estado de tensión permanente. La esclavitud en gran escala, que constituyera el eje de la producción y la economía de la antigüedad, desapareció por completo a consecuencia de los valores reverenciados por el cristianismo, pues dirigiéndose éste a los humildes y oprimidos exaltó el principio de la perfección y la moralidad del individuo, en tanto que menospreciaba la importancia de los ricos y poderosos.

Sin embargo, la esclavitud fue reemplazada por la servidumbre; institución que provino de las correrías bárbaras, justamente de la situación en que vivieron los campesinos empobrecidos y del terror que les inspiraba la destrucción y el saqueo que dejaron las invasiones bárbaras. Inmersos en esas circunstancias, los campesinos pobres se vieron obligados a acudir al amparo caballero de las familias acomodadas, a condición de contribuir con importantes tributos económicos y militares, cuyo incumplimiento trajo como sanción la pérdida de la libertad del hombre y su adscripción natural a la propiedad de las tierras que, por ese hecho, pasaron a engrandecer la riqueza de los señores feudales.

El cristianismo, habiendo nacido en un rincón del imperio y entre un pueblo humilde y despreciado como el hebreo, después se transformó en la religión de las clases dominantes, concibiendo a la esclavitud de la época como reflejo de la caída del hombre. San Agustín y otros pensadores eclesiásticos justificaron la esclavitud profesando que ésta constituye un remedio social y un castigo de Dios por el pecado del hombre. La necesidad de las instituciones sociales es una consecuencia de este hecho con el que la monarquía comparte sus ideales y a la que el clero le saca el privilegio de ostentar la jurisdicción arbitral sobre los fieles.

A lo largo de la Edad Media, la vida de las sociedades transcurrió en medio del desorden y la anarquía. Como resultado a este proceso de disgregación los hombres más avanzados se inclinaron por fomentar el culto a la ley, para estar en condiciones de levantar en su respeto las bases de una sociedad en la que reinara el orden y la estabilidad; aunque en el contexto de aquellas condiciones económicas, empujadas por la servidumbre, el Estado acrecentó su poder descomunemente frente al individuo, arrojándolo a los límites intolerables de una sociedad gobernada por el absolutismo de una monarquía atávica.

Precisamente al lado de estas relaciones sociales en que trasciende

desenfrenado el poder del absolutismo, es cuando aparece una tendencia acusada por sentir afecto e inclinación por preservar la libertad del hombre. Las teorías de Locke y Montesquieu son abrazadas por las naciones que defienden con energía que el soberano no es el rey, sino el pueblo, y que un pueblo llamado a ser libre necesita de una constitución para evitar la tiranía y restablecer en su lugar el equilibrio de una sociedad sentada en la división de los poderes. La influencia de tales concepciones de la sociedad se ha preservado hasta nuestros días, con un factor más que remueve las funciones de la solidaridad y la cohesión social de las naciones contemporáneas; éste es el amor por la igualdad estimulado principalmente en las organizaciones donde el poder permanece en posición de ser alcanzado y establecerlo con todos sus mecanismos de imposición al servicio de las grandes corporaciones industriales. El punto de convergencia es que la inhibición producida en el ánimo de los trabajadores encuentra escape en la participación que obstruye el eventual ascenso al poder de los empresarios, sólo porque la definen como un intento por impedir la concreción de un derecho tradicional a la superioridad.

A pesar del evolucionado grado de desarrollo del hombre, las guerras de conquista continúan sucediéndose para extender el poder de una nación sobre otra o simplemente para adquirir nuevos territorios que les permita el abasto de materias primas requeridas para el bienestar particular de sus pueblos. Las dos grandes conflagraciones tuvieron su causa en un estado de rivalidad que envolvió, por un lado, a Alemania, Italia y Japón, y, por el otro, a Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, y fueron suscitados por el reparto de territorios coloniales y el disfrute de las primeras materias con trascendencia al dominio del mercado internacional.

IV. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL

Una vez que se vislumbraron disipadas las diferencias militares de los países involucrados en la segunda gran conflagración en 1944, explicada la contienda así en términos de expansión y dominio del mercado internacional, se hizo necesario establecer las bases de un sistema monetario internacional que favoreciera el proceso de reconstrucción que se preveía como imprescindible; pero básicamente el diseño de estos mecanismos financieros debía auspiciar la disposición política y la convergencia de las naciones en este nuevo orden monetario, para que la situación económica de los países devastados por la guerra no indujeran a sus gobiernos a adoptar políticas nacionalistas que hicie-

ran recordar las grandes diferencias existentes antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo importante era proceder a la reconstrucción económica de los protagonistas de la hostilidad, pues aquellas circunstancias exigían la atención inmediata de las necesidades alimenticias, el abasto de materias primas, y se requería de la reposición del aparato productivo que había quedado destruido en la contienda. Estados Unidos era el único país que estaba en condiciones de satisfacer todas las necesidades materiales para la reconstrucción. A instancias de los mismos norteamericanos se comenzaron a formalizar los acuerdos de Bretton Woods, que instauraban todo un nuevo orden entre los países que a la postre garantizarían un clima de absoluta libertad —aunque se expresaba por boca de los interesados que estos mecanismos debían ofrecer la “máxima libertad posible”—, en realidad se pretendía incluir la libre convertibilidad de las monedas, la ausencia de trabas al comercio mundial y el otorgamiento de la más absoluta libertad a los movimientos internacionales de capital.

Sobre estas bases se edificó el actual sistema monetario internacional, cuya estructura se hizo descansar en el *gold exchange standard*, ofreciendo para la seguridad de las operaciones comerciales realizadas por los países, la posibilidad de que contasen con reservas constituidas en oro o en algunas monedas de reserva, tales como el dólar y la libra esterlina, que revestían, por el papel que representaban dentro de sus preponderantes economías, la aptitud de convertirse automáticamente en oro al precio fijo de 35 dólares la onza *troy* del metal fino. En estas circunstancias todos los países miembros quedaban relacionados entre sí a través de sus monedas, al determinar la paridad o proporción en que se cambiaría su dinero con el oro o el tipo de cambio con el dólar, aunque lo más sobresaliente del nuevo sistema, consistía en la firmeza del cambio de las monedas una vez que los tipos de cambio eran fijos y sólo se permitirían fluctuaciones en su valor siempre y que sus oscilaciones no excedieran del 1% por encima o por debajo de la paridad mantenida respecto al dólar o al oro; además, los países participantes de la conferencia de Bretton Woods asumieron la obligación de intervenir en los mercados de cambios para mantener la cotización de su moneda dentro del 1% por encima o por debajo de su paridad, comprometiéndose a través de sus gobiernos a adquirir su propia moneda a cambio de oro o de cualquiera de las monedas de reserva si las circunstancias la desplazaban a la baja, y a venderla comprando las monedas que se les ofrecieran disponibles, si tendía al alza. Así, el tipo de cambio de todas las monedas permanecía estable apegado al régimen del patrón oro y con las peque-

ñas variantes que suponían las fluctuaciones del 1%; sólo en el caso de que se produjera un desequilibrio fundamental en las balanzas de pagos, los gobiernos conservaban la aptitud de modificar el tipo de cambio de su moneda dentro de una esfera en que la devaluación o la revaluación adoptada debía girar en un límite máximo del 10% de su valor, precisándose la autorización previa del Fondo Monetario Internacional en el supuesto de que la modificación del tipo de cambio superara este último porcentaje.

Concebido en los anteriores términos el financiamiento original del sistema monetario, frente a la nula o escasa flexibilidad para obtener nuevas extracciones de oro, la única forma de obtener liquidez que facilitase la recuperación económica estaba acompañada de la posibilidad de acumular los dólares que Estados Unidos imprimía.

Como es natural, durante la conferencia de Bretton Woods, que auspició la creación del Fondo Monetario Internacional y la constitución del Banco Mundial, cuyas operaciones fueron conocidas inicialmente por cernir su objetivo en la reconstrucción y más tarde sólo en el desarrollo que ocupa hoy su total actividad, se debatieron ideas diametralmente encontradas, explicables por los intereses tendientes a alcanzar el dominio del mercado que ofrecía la reconstrucción europea: la británica y la norteamericana; acabando por imponerse la posición estadounidense.

Según el plan propuesto por los norteamericanos, los recursos operacionales del Fondo estaban constituidos por las cuotas que cada país debiera entregar de acuerdo con su capacidad económica, y este monto de la participación en el capital determinaba la base sobre la que se distribuirían las decisiones en el seno de los órganos del Fondo. A cambio de la cuota con que participaban en el capital, compuesto por un 25% en oro y un 75% en moneda nacional, los países miembros adquirirían la posibilidad de disponer de derechos de giro y obtener crédito en caso de necesidad en la moneda extranjera que necesitare para efectuar sus pagos, hasta un límite máximo del 125% de su respectiva cuota y hasta en un 150% para países subdesarrollados mediante la entrega de moneda nacional al Fondo, comprometiéndose a recobrar su propia moneda al finalizar el periodo durante el que se le concedió el préstamo a cambio de monedas de reserva o de la divisa adquirida. Pero las facilidades para la adquisición de un crédito nunca revistieron el carácter de automáticas; esta característica únicamente la poseía el 25% de la cuota de cada país, que correspondía a la parte que el país había entregado en oro; de modo que cualquier posibilidad de ayuda financiera que requiriera una nación miembro de la

comunidad internacional fuera de este contexto, dependía de que el país negociara con el Fondo las condiciones del crédito sobre el resto de la cuota, debiendo supeditar la concesión del préstamo a la adopción, por parte del país solicitante, de una serie de medidas y restricciones económicas supervisadas por los órganos del Fondo.

Configurado el sistema monetario con arreglo a los intereses norteamericanos, las cuotas aportadas no se constituían en calidad de fondos o reservas contra los que pudiesen girar los países miembros de la comunidad en el pago de sus deudas; por el contrario, brindaban la perspectiva de disponer de una línea de financiamiento y crédito en el que las posibilidades de tener medios de pago, para enfrentar las necesidades de las transacciones internacionales venían acompañadas por las reservas de oro y el volumen de dólares que cada país tuviese, y de las que se hallaren en poder del Fondo Monetario Internacional, precisamente cuando las circunstancias acusaban que no iban a ser suficientes las disponibilidades del oro o de dólares.

Después de la guerra, el único país que por su poderío industrial estaba en condiciones de proporcionar la ayuda que propiciara la reconstrucción, era Estados Unidos. Fue sin duda la propicia situación como economía dominante lo que determinó la adopción de un sistema que favoreciera notablemente a Estados Unidos, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario. Este país se encontraba desde principios de siglo con una balanza comercial con superávit que debería aumentar cuando los países europeos iniciaran sus compras masivas encaminadas a la reconstrucción industrial y a la alimentación de sus habitantes.

En 1955, la deuda del mundo capitalista respecto a Estados Unidos se cifraba en 38,000 millones de dólares. Por tanto no quedaba otra solución que "pedir" a la nación norteamericana una política deliberada de déficit en su balanza de pagos. Dentro de esta política de evitar la asfixia de la reconstrucción europea, asfixia que como es natural tampoco convenía a los intereses económicos y políticos estadounidenses, cabe situar la puesta en marcha del Plan Marshall por el que en un plazo de cuatro años, Estados Unidos concedió créditos y donaciones a los países europeos por valor de más de 12,000 millones de dólares.

Evidentemente la proporción de estas relaciones comerciales que arrojaban permanentes déficit para los países europeos, solamente podían producirse si la balanza de servicios y capitales de Estados Unidos presentaba un signo negativo a causa de la salida deliberada de capi-

tales en forma de gastos militares con tropas estacionadas en el extranjero, de préstamos o de inversiones directas realizadas por las empresas norteamericanas en otros países atraídas por su mercado. Y aunque semejantes partidas desencadenan un serio déficit, Estados Unidos no debía frenar el desenvolvimiento de la economía arguyendo el pretexto de estos desequilibrios en el sector externo; por el contrario, la persistencia del signo negativo estaba apoyada en los demás países que solicitaban estos déficit; lo que por supuesto nunca ha dejado en tela de duda que la situación era inmejorable para la posición norteamericana.

La búsqueda deliberada de déficits año tras año a fin de ofrecer liquidez al sistema puede considerarse como una buena política para los norteamericanos y los países interesados en su reconstrucción. Sin embargo, su constante permanencia en las cuentas del comercio internacional no podía dejar de entrañar riesgos muy importantes. El principal era el peligro que corría la confianza en la convertibilidad del dólar en oro al precio de 35 dólares la onza, que era una de las bases del sistema. Mientras las reservas de oro de Estados Unidos fueran superiores a los dólares que estaban en poder del extranjero, que en cualquier momento podían demandar su cambio, la convertibilidad del dólar parecía asegurada.

Las ventajas deliberadas que ofrecía el sistema, consideradas atenta y detenidamente en orientación segura para consolidar la hegemonía económica y política de los Estados Unidos, hicieron que muy pronto estos déficit, aunque moderados y persistentes desde 1950, "empezaran a agudizarse a partir de 1958. El volumen de dólares en poder de los demás países, tanto en los bancos centrales como en manos de los particulares, fue adquiriendo grandes proporciones. En 1960 los dólares en el exterior superaban el valor de las reservas de oro de Estados Unidos, y en 1965, éstas ya no cubrían tan siquiera los dólares en poder de los bancos centrales."

En aquellas circunstancias empezó a cundir la sospecha de que Estados Unidos difícilmente podría hacer frente a sus compromisos de convertibilidad. Era incuestionable que si uno de los pilares básicos del funcionamiento de los acuerdos de Bretton Woods permanecía en la creencia de la inalterabilidad de los tipos de cambio al menos de las monedas de reserva, la devaluación de la libra esterlina registrada en noviembre de 1967 puso en entredicho todo el esquema y señalaba al dólar como siguiente víctima de la especulación y blanco de fuertes presiones monetarias. Hasta que finalmente el gobierno de Estados Uni-

dos dejó de ejercer presión sobre los demás gobiernos para forzarlos a que no solicitasen la conversión de los dólares que ellos tenían. En 1971, una vez que se dibujaba en el panorama económico norteamericano una balanza comercial presentando un déficit por primera vez desde 1893, obligó definitivamente a Nixon a declarar la no convertibilidad de *iure*, aunque de hecho ya se daba la imposibilidad de la conversión del dólar en oro, lo cual sorprendió con cierta largueza a la confianza de los países miembros de la comunidad internacional, que hicieron grandes esfuerzos por sostener el valor del dólar norteamericano del que disponían en sus cajas a raudales. El riesgo que corrían los países poseedores de dólares es que la moneda norteamericana sufriera una devaluación respecto a sus monedas, y se abriera la posibilidad de que les recompraran grandes cantidades de dólares por menos de su propio dinero y que, en general, las deudas estadounidenses expresadas y convenidas en dólares quedasen reducidas.

Los déficit estadounidenses que por mucho tiempo inundaron los mercados y las cajas de los países de Asia y Europa, apuntaban grandes pérdidas motivadas por la manipulación de una riqueza que se manifestaba como ficticia al lado de su inconvertibilidad y la pérdida de su valor monetario. Para resguardarse de todos estos riesgos que entraña la crisis de las finanzas internacionales, los dólares excedentes en poder de los bancos centrales, nuevamente fueron colocados en el mercado estadounidense, depositados en bonos del Tesoro norteamericano productores de ciertos beneficios, pero la mayor parte de la masa de este dinero en poder de los bancos comerciales, dada su devaluación expresada en oro o en términos de las monedas europeas, ha buscado ocupar un lugar en las plazas de Europa, Asia y últimamente en América, pretendiendo obtener a corto plazo los altos rendimientos que ofrecen los diferentes tipos de interés, las expectativas de las revaluaciones de las monedas o simplemente en búsqueda de colocaciones favorables dado el poco control que ejercen los gobiernos de estos países sobre dichos capitales.

En suma, la ágil movilización de todos estos capitales expresados en dólares sin posibilidad de cambiarse en oro, han hecho pensar a los interesados en el propósito de entablar negociaciones para una verdadera y profunda reforma al sistema monetario internacional, pero evidentemente ningún país parece desear y menos aún emprender como suya tal reforma, que resultaría lesiva para los altos dividendos negociados desde la cumbre de los órganos del Fondo, de no continuar poniendo estas reservas al supuesto servicio de las necesidades de los países subdesarrollados.

V. MÉXICO, UN CASO DE LA POLÍTICA DE AJUSTES IMPUESTA POR EL FMI

A mediados de 1982, cuando México encontró en sus cuentas la imposibilidad de cubrir los intereses del servicio de la deuda externa, no sólo encaró la incómoda situación de faltar a sus compromisos de pago, sino que además se vio en la necesidad de apelar a la calidad de los vecinos para que en nuestro nombre gestionaran ante los órganos del FMI un crédito que hiciera posible la adquisición de granos destinados a la alimentación de los mexicanos. Esta penosa situación de México frente a los acreedores se exhibe precisamente en un momento de transición política.

Desde la aparición de los primeros indicios de la crisis financiera, las autoridades políticas negociaron la incorporación de algunos funcionarios a las decisiones del gabinete ejecutivo, con el propósito de adelantar los pasos que facilitarían la transmisión de los poderes y garantizaran —a propios y extraños— la continuidad política del régimen que cuidara el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la administración de los recursos demandados a la banca internacional. En aquella ocasión, el dilema para las autoridades mexicanas, lejos de circunscribirse a la transitoria posición de verse impedidas para abonar el pago de la deuda externa, o a la mera necesidad de contar con recursos económicos que permitieran concluir el ejercicio de la administración pública, planteaba el problema de cuestiones más elementales como la alimentación del pueblo que habíase descuidado en aras de promover el desarrollo y notables proyectos de expansión; todos constituían ángulos diferentes del mismo conflicto de intereses.

La economía nacional en su conjunto se vio seriamente resentida ante la decisión del Banco Mundial y de otros organismos internacionales de financiamiento comercial y de fomento, en el sentido de que al país se le cancelaban las oportunidades para tener acceso a los recursos crediticios de esas entidades, debido a que estimaban que México había superado en mucho los límites de un país pobre o que está en vías de desarrollo, una vez considerados sus cuantiosos yacimientos petrolíferos que lo situaban al lado de los ricos. Tan sólo la necesidad de aprovisionarse de recursos financieros para poder terminar la administración del gobierno por concluir su mandato, dentro de un panorama económico que resultaba adverso dada la caída de los precios del petróleo, cuyas ventas constituían la principal fuente de divisas para el país, contribuyó a que México tuviera que negociar con el Fondo la concesión de un préstamo, supeditando la entrega de las partidas que lo componían a la adopción

por parte del gobierno mexicano de una serie de medidas financieras y ajustes a la economía nacional. Durante aquellas negociaciones, sobresalía siempre la solicitud mexicana por obtener términos de gracia en el pago de su deuda y los acreedores asediaban el curso de las demandas cuestionando el manejo de la economía mexicana.

Los acreedores extranjeros no perdonaban la persistencia de los déficit en la balanza de pagos, pero sobre todo, al observar el comportamiento permanente y progresivo de estos déficit durante el periodo del llamado desarrollo estabilizador, únicamente advertían inmoralidad en el sistema que definieron desde el ángulo de las preferencias administrativas para el manejo de las obras y los servicios públicos. Los políticos mexicanos que solían estar acostumbrados al trato siempre amable y cortés de los demócratas norteamericanos, en una relación casi irresponsable y vasta en libertades para administrar las ayudas destinadas a combatir los focos de miseria susceptibles de generar tendencias de emancipación, en esta ocasión no resistieron las conversaciones entabladas con los gobernantes republicanos en un plan de exigencia, de rigurosa responsabilidad y crueles en el trato. Los acreedores extranjeros prefirieron abordar el problema de la deuda externa con técnicos, eficientes en el trabajo que se les encomienda y responsables en los proyectos que se les confía, seguros de que los especialistas entienden mejor de razones, sin titubeos ni consideración alguna de humanidad, casi irreflexivamente siguiendo el texto que indica la técnica, a propósito de que de continuarse una situación en la que se comporten de manera duradera los déficit en la balanza de pagos, es preciso ejercer una política deflacionista que haga estremecer la producción y reduzca severamente los niveles del empleo y las condiciones de vida de las familias.

Desde el punto de vista estrictamente técnico, el procedimiento que indica a la recta como el camino más corto entre dos puntos, es tan positivo y real como señalar que para evitar los constantes déficit en la balanza de pagos es preciso adoptar una política deflacionista a través de la imposición de inclementes restricciones a la demanda interna. Cuando algún país advierte en el desenvolvimiento de su economía que no dispone de reservas suficientes, se deben tomar medidas contractivas que bien pueden consistir en el incremento al tipo de interés, de modo que frene o haga imposible el acceso al crédito para que deliberadamente decaigan las inversiones y la ocupación, aumento de la presión fiscal, obstaculización política a las demandas salariales y otras que pueden llegar hasta la devaluación de la moneda; con ello se pretende que las restricciones impuestas al consumo interno se traduzcan en una sensible baja de las importaciones y la nueva producción en vez de ser

destinada para la inversión o el consumo del país se oriente a la exportación. A estas medidas pueden reducirse como común denominador los diez puntos del Programa Inmediato de Reordenación Económica puesto en práctica por el gobierno mexicano; destacan la reducción del presupuesto público ejercido en obras y servicios comunitarios, el incremento inmediato a los precios de los bienes y servicios producidos por el Estado, tales como la electricidad, los combustibles y el transporte de carga; y por supuesto, sin dejar de mencionar la elevación de la tasa del impuesto al valor agregado y la liberación total de los precios de las mercancías para instrumentar otros más altos. Semejante política de estabilización posee la característica de producir efectos negativos, pues en general repercute en un aumento del desempleo y en una disminución o estancamiento de los salarios. Debido a estas razones los gobiernos de origen democrático rehúsan con frecuencia aplicar estas políticas, mientras que los gobiernos conservadores las han aplicado con mayor disposición y entusiasmo como el militar de Augusto Pinochet.

Los patrones norteamericanos que desde hace tiempo han venido frecuentando el trabajo eventual de los mexicanos, son los principales agentes ante el mismo gobierno de Estados Unidos en hacer el reconocimiento y difundir entre sus socios, que a los trabajadores mexicanos suele distinguírseles por la gran capacidad de trabajo que empeñan y por su productividad cuando son utilizados en los centros de trabajo, después de haber sobrevivido las difíciles condiciones de vida que ofrece la falta de perspectivas de empleo en el campo mexicano y, como es natural, tras la dramática persecución a que son sometidos por parte de los agentes de inmigración. El temor a los malos tratos que la vigilancia del servicio de inmigración ejerce, al extremo de la humillación y la indignidad, sobre aquellos que no tienen regularizada su estancia en Estados Unidos, pero fundamentalmente la amenaza a ser deportados a un medio que les es adverso, es la causa que hace a los mexicanos esmerarse en el trabajo y poner lo mejor de su ingenio a un precio muy por debajo de los salarios pagados a los trabajadores norteamericanos. La anterior perspectiva motivó que los empresarios estadounidenses vuelvan sus ojos a la atractiva posición del trabajo de los mexicanos, ostensiblemente convencidos de que los trabajadores de su país cayeron en la perversa costumbre de tener empleo bien remunerado y perdieron la ética del trabajo y el espíritu pionero norteamericano, ideales supuestamente forjadores de aquel país.

Desde la ventajosa posición que ocupan los capitales arribados a la economía norteamericana como secuela de la inconvertibilidad del dólar, lo ideal, en la trabazón social anterior, es aprovechar el enorme

peso que ejerce el pago de los servicios de la deuda externa sobre las precarias economías de los países subdesarrollados, para inducir a los gobiernos de estos países a la adopción de severos ajustes que lleven sus efectos a una clara reducción de la demanda de mano de obra y consecuentemente produzcan el decaimiento de los salarios, hasta que por fin el desencanto de los trabajadores lleve al sindicalismo a la pérdida absoluta de su capacidad para defender los intereses de los obreros.

Paralela a la política económica del régimen, durante los últimos años se ha estado llevando a cabo, en México, un loable esfuerzo por motivar el sentido del deber, básicamente el deber del trabajo impregnado de la plausible noción de la productividad. Ahora es inevitable la austeridad, la sobriedad o el realismo económico, y la única salida posible a nuestras dificultades económicas consiste en aumentar la producción, y en lugar de destinarla al consumo del país, es preciso canalizarla hacia la exportación que nos permita la adquisición de divisas necesarias para pagar la deuda externa. Eso es inobjetable, y en época de sufrimiento y de crisis, un esfuerzo de esta naturaleza además de necesario, es glorificable.

La situación de México no da para más; desde 1940 se confeccionó todo un sistema político que diseñó la integración de la economía nacional sobre una injusta estructura financiera, en la que la principal fuente de ingresos para el Estado la constituye el impuesto sobre la renta, que lo mismo grava al que percibe ingresos por su trabajo que al que los recibe por el empleo de bienes de capital. La Revolución mexicana procreó una generación de políticos que hizo del poder un instrumento de protección y de apoyo en infraestructura a la industria nacional en la que invirtieron sus particulares intereses; la administración de aquellos fondos poco tuvo que ver con la asistencia de las necesidades sociales; en realidad la administración del presupuesto gubernamental permaneció encaminado a cubrir la deficiencia de algunos empresarios y financiar todo un proceso productivo alimentado de electricidad, combustibles, transporte de carga y otros servicios subsidiados con recursos de la nación. A pesar de todo ello, con el transcurso del tiempo se le ha heredado a la economía mexicana una de las más grandes deudas del mundo que hipotecan el trabajo de futuras generaciones.

En el precario estado en que se encuentra la economía nacional, de manera colectiva se intuye que lo que hace falta es aumentar la producción, disminuir el consumo y estimular las exportaciones. Sin embargo, por mucho que sea la exaltación al sentido del deber, no siempre re-

sulta una solución permanente y su éxito perdura momentáneamente. Los ajustes a la economía mexicana y los programas de estabilización significan en la vida humana un estado de tensión y una constante resistencia a los impulsos naturales, que si se prolongan, causan el agotamiento y la disminución de las energías naturales. La falta de una razón que inspire la solidaridad del pueblo, hará que el cansancio conduzca a la indiferencia o al escepticismo respecto a la validez de sus instituciones o a que adopte una salida falsa en búsqueda de un camino más corto para alcanzar la prosperidad. Quizá el terremoto que devastó partes de México y entre ellas la capital del país, donde se encuentra establecida casi la mitad de la planta productiva, vaya a fomentar el espíritu de solidaridad social de los mexicanos; pero la decisión del Fondo Monetario Internacional de negarle mayor ayuda crediticia a México, aduciendo que el gobierno no ha cumplido con las condiciones de austeridad impuestas, invariablemente agravará los terribles problemas económicos incluyendo el pago de la deuda externa. En general, se puede estimular la conducta de los hombres con la esperanza o forzarlos mediante el terror pero, en cualquiera de los dos casos, para que estos sean eficaces sin engendrar el escepticismo, la esperanza y el terror deben ser muy intensos e inmediatos. La fuerza impulsora de los grandes cambios sociales ha tenido que depender de la primitiva base instintiva y de un sentido apenas consciente del interés colectivo; una de las causas de tensión social en la vida del hombre descansa en que puede darse cuenta de los motivos racionales que ordenan su comportamiento no desmerecido por el instinto natural; pero cuando la conducta institucional violenta los instintos naturales con excesiva severidad, la naturaleza se desquita produciendo la indiferencia y el decaimiento de las costumbres, o lo que es peor, desencadena la fuerza de un instinto destructor; en cualquiera de los dos casos puede hacer que una estructura social y política inspirada en la razón se derrumbe.

VI. CONCLUSIONES

Durante el curso de 1982 se producen las tensiones de lo que ahora se conoce como la crisis de la deuda externa latinoamericana. Lo explosivo de la situación reside en que las economías de América Latina crecieron muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, acompañadas del bienestar material y la secuencia que deja la estabilidad social, gracias a los inmensos recursos naturales de que dispone y al trabajo de su ingeniosa población. Los mejoramientos económicos se vieron interrumpidos a medida que la economía mundial entraba en

recesión, precipitando la caída de la demanda de exportación, y a medida que se incrementaban acentuadamente las tasas de interés. Aunque las limitaciones más bien se encuentran unidas a la actitud que tomaron los bancos comerciales de suspender sus créditos a América Latina, a raíz de la crisis de la deuda externa mexicana, la mayoría de los países de la región tuvieron que ajustar drásticamente las proyecciones de sus economías.

En realidad, el rompimiento de la tendencia por mantener el crecimiento de la producción y el empleo no es un fenómeno que sólo abarque a la región; es indudablemente un estado de tensión que conmueve a todos los países miembros de la comunidad internacional. El fenómeno tiene su origen en el elevado nivel que alcanzaron las economías industrializadas, el cual les ha hecho considerar, dentro del actual sistema monetario internacional, que se ha llegado a los límites de la expansión externa y de que han desaparecido las fronteras desplazables para el desarrollo de una economía basada en el constante mejoramiento de la vida material. Semejante concepción permanece vigorosamente alimentada por el descenso de la tasa de crecimiento de la población al que parece están dedicadas las naciones industrialmente desarrolladas, lo que hace suponer que se nos conduce hacia el suicidio de la raza o, bien, se pretende evitar otra gran conflagración intentando preservar las mismas estructuras de dominación en un ambiente de estancamiento y depresión de las economías subdesarrolladas.

En condiciones de pobreza, impuestas dentro del esquema de un imperio, es difícil encontrar los medios para lograr la paz y la unidad mundial; sin embargo, los depredadores de la paz que comúnmente se refugian alrededor de los imperios, estiman que es absurdo hablar de la estabilidad social o de sus posibles implicaciones en un estado mundial, debido fundamentalmente a aquel primitivo sentimiento de afinidad y al supuesto de que la unidad mundial proyectará una sociedad sin enemigos a los que haya que temer, sociedad que, como es natural, está en peligro de derrumbarse por la falta de una fuerza cohesiva.

Lamentablemente todo parece indicar, desde los remotos tiempos de las guerras de exterminio hasta las hostilidades de los tiempos modernos, que el terror ha sido el motivo principal del aumento de tamaño de las comunidades y el miedo ha reemplazado cada vez más a la solidaridad tribal como factor de unidad social. Una de las grandes cualidades del capitalismo radica en que habiéndose edificado en la división internacional de trabajo y el empleo de las más avanzadas técnicas para la producción en gran escala, disemina rápida e invariablemente sus beneficios sobre las condiciones de vida de los pueblos hasta los últimos

confines del mundo; pero el mejoramiento material en la vida de las naciones hace suponer una lucha competitiva por adueñarse de las perspectivas del mercado. El surgimiento cíclico de un mercado sobresaturado de bienes y servicios propicia la aparición del desempleo crónico; esto ha obligado a precipitar el advenimiento de una economía estacionaria que evite las luchas competitivas de las naciones desarrolladas y desplace la arraigada preocupación por las realizaciones materiales, aspectos característicos de las economías progresivas. El riesgo que corre la implantación de la política de ajustes para forzar deliberadamente al trabajo masivo de las economías subdesarrolladas, en un plano de explotación, es que una economía estacionaria produce una profunda ansiedad entre los hombres, nacida de la convicción de que el referido estancamiento conduce al desempleo crónico, el cual, a su vez, lleva al fracaso del sistema económico sobre el que se construyen las democracias contemporáneas.